



CAPÍTULO IV

POLÍTICAS PÚBLICAS Y GESTIÓN PARA PRODUCTORES AGROPECUARIOS MATANCEROS

María Carolina Feito

1. INTRODUCCIÓN

Analizamos relaciones entre asociaciones y estado municipal y el rol del gobierno local en la facilitación e instalación de cambios socio técnicos, en un contexto de incertidumbre y estrategias flexibles (Feito, 2018b). Las alternativas de gestión para estos productores operan en una arena de conflicto y disputa en la implementación de políticas y programas de desarrollo.

Adoptando una perspectiva antropológica de observación de las prácticas y de los intereses en conflicto, mediante la realización de trabajo de campo etnográfico con metodologías cualitativas enmarcadas en la teoría social que focaliza en los sujetos, “enfoque orientado al actor” (Long, 2001), analizamos las arenas de conflicto y disputa en las que opera la implementación de los programas de desarrollo en el distrito La Matanza. Identificamos alternativas de gestión para la agricultura urbana y periurbana, particularmente los agricultores familiares. Las intervenciones de desarrollo no pueden comprenderse sólo desde las instituciones que las implementan: se requiere incluir la consideración de los modos de vida de los actores involucrados.

Realizamos trabajo de campo etnográfico durante enero-julio de 2017 y julio-noviembre 2018 , mediante entrevistas en profundidad a los miembros beneficiarios de programas, funcionarios municipales, técnicos extensionistas de INTA AMBA y participantes de organizaciones de productores del partido,



regionales y nacionales. Hicimos observaciones participantes en reuniones de los programas, de las organizaciones, así como en capacitaciones del programa Huertas Matanceras, y en eventos convocados por los municipios periurbanos relacionados con la temática productiva.

Los procesos sociales que derivan de una intervención de desarrollo implican negociaciones que son diferencialmente internalizadas por los diversos actores. Descubrimos interfaces entre productores, extensionistas, e implementadores de programas y políticas. Intentamos relevar en qué medida inciden las políticas locales en la configuración de la producción agropecuaria del partido, analizando acciones y/o políticas públicas para el sector, identificando desde qué enfoque/s se concibe el desarrollo en dichas políticas y descubriendo percepciones de los actores sociales. Analizamos el diseño e implementación del programa “Huertas Matanceras”, diseñado por el gobierno municipal y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y concebido explícitamente como una política de inclusión social y promoción de soberanía alimentaria para incorporar nuevas familias a la horticultura. Este programa es producto de particulares formas de interacción entre actores y constituye antecedente de valoración de la agricultura familiar por parte del gobierno local, en un contexto de invisibilización histórica de las producciones agropecuarias (Battista et al, 2014).

Realizamos trabajo de campo etnográfico entre enero 2017 y noviembre 2018, con visitas regulares a las huertas del Programa en distintas localidades del partido y contactos con funcionarios municipales y técnicos del INTA que participaban en la implementación del programa, considerando: Unidad de Estudio (ámbito espacial donde se realizó la investigación): partido de La Matanza, provincia de Buenos Aires, Argentina; Unidad de Análisis (sujetos de la investigación): sujetos participantes del Programa Huertas Matanceras (técnicos del municipio y del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria —INTA—, capacitadores, productores agropecuarios y vecinos beneficiarios, funcionarios del municipio responsables del programa). Realizamos entrevistas en profundidad a beneficiarios, técnicos y funcionarios del programa, y observaciones participantes en los predios donde se asentaban las huertas, y en reuniones de capacitación y de grupos de promotores del programa. Utilizamos información secundaria proveniente de fuentes bibliográficas y estadísticas nacionales.

2. RELACIÓN DE LOS ACTORES CON LOS AGENTES DEL DESARROLLO EN EL ENFOQUE ORIENTADO AL ACTOR: UNA CONSTRUCCIÓN SOCIAL

Todo actor social interactúa con otros, administrando estas relaciones en el marco de redes sociales que le permiten canalizar comportamientos específicos (demanda de información, bienes, tecnologías, empleo, servicios, etc.). En este contexto relacional, desarrolla habilidades para influenciar a otros y regula la influencia de estos otros hacia él mismo. En este marco todos los actores administran alguna cuota de poder, aunque sea mínima. En las intervenciones de desarrollo, la relación de los actores sociales con los agentes externos (instituciones públicas, Ongs, empresas privadas) es construida. La fuerza o poder que provoca cierto resultado es la denominada agencia (Giddens, 1984). Este concepto se refiere no sólo a tomar decisiones, sino a la capacidad requerida para organizar prácticas que permitan realizar las decisiones tomadas (Long, 1992). La capacidad de agencia no está definida por la mera intencionalidad de hacer algo, sino por el poder de provocar el resultado.

El enfoque constructivista basado en la orientación de los actores, tiene como presupuesto básico que todo influjo externo (proveniente del Estado, del mercado, de grupos dominantes, etc.) es mediatizado por los mismos actores directos del desarrollo (y las organizaciones locales que éstos integran), trabajando con esos factores externos a favor de sus propios intereses y necesidades. Los actores sociales, como partícipes activos del diseño de estrategias, organizan interacciones individuales y colectivas frente a otros actores locales y externos, basándose en diversos criterios cognitivos e intereses, necesidades, experiencias y perspectivas. Es decir que existen mediaciones culturales, locales y de decisiones, que transforman las determinaciones estructurales.

La presencia de intervenciones sociales en forma de Políticas, Programas y Proyectos, puede convertirse en un factor significativo en influenciar los modos de vida de los actores sociales a partir de brindar recursos organizacionales, financieros, cognitivos, etc, así como acceso a nuevas redes sociales. A su vez, las acciones y reacciones de los beneficiarios pueden modificar también aquellas intervenciones (Bilella y Tapella, 2008). De este modo, todas las formas de intervención externa son mediadas y transformadas por los mismos actores y estructuras (Long, 1992).

En la implementación de una intervención de desarrollo, las interfaces sociales definen áreas de conocimiento e interacción que entrecruzan las perspectivas

de una gran diversidad de actores, un campo socialmente construido a partir del conflicto y la negociación, en el que se define la distribución de recursos y la legitimación de los procesos de intervención de los distintos actores. En este sentido, consideramos la definición del desarrollo como un proceso construido, de permanente negociación entre sus protagonistas (beneficiarios o agentes externos del desarrollo) y no como mera ejecución de un plan con objetivos, metas y metodologías externamente preconcebidas (Feito, 2005).

3. LA SEGURIDAD Y SOBERANÍA ALIMENTARIAS DESDE UN ENFOQUE TERRITORIAL

El concepto de seguridad alimentaria es utilizado a partir de 1974 por la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) definiéndolo como un “derecho”, retomando documentos internacionales que desde 1924 reconocen a la alimentación como uno de los derechos fundamentales del ser humano (Actas Fundacionales, FAO). En los 80, mejorar la seguridad alimentaria pasaba por lograr mejoramiento en el abastecimiento, producción y calidad biológica de los alimentos. Amartya Sen (1982), plantea que la seguridad alimentaria no depende de la producción agroalimentaria, sino del acceso a los alimentos por parte de toda la población, enfatizando el marco social y político que regula la adquisición de alimentos. La inseguridad alimentaria implica falta de acceso seguro a cantidades suficientes de alimentos inocuos y nutritivos para el crecimiento, desarrollo normal y para una vida activa y sana, siendo su principal causa la pobreza. La Vía Campesina plantea ante la “Cumbre de los Pueblos” la soberanía alimentaria como “...el derecho de cada pueblo y de todos los pueblos a definir sus propias políticas y estrategias de producción, distribución y consumo de alimentos, a fin de garantizar una alimentación cultural y nutricionalmente apropiada y suficiente para toda la población” (Carballo, 2017).

El enfoque territorial privilegia el territorio local, como “la unidad donde resulta más plausible la instalación de procesos de desarrollo sostenible” (Rodríguez Bilella y Tapella, 2008), así como la orientación hacia la promoción de capacidades de los gobiernos descentralizados y de la sociedad civil para movilizar dichos procesos en el territorio. Ello implica especial atención a niveles municipales donde se facilita la interrelación entre estructuras administrativas

locales e instituciones civiles. El concepto de “territorio” es instrumento privilegiado de la comprensión de una realidad compleja, integrando en una totalidad condicionamientos estructurales y acciones de los actores como sujetos competentes capaces de producir innovaciones adaptativas (Manzanal, 2006). Utilizamos la noción de desarrollo territorial basada en la búsqueda de “competitividad sistémica de los territorios”, subrayando la importancia de la proximidad entre actores para coordinar acciones y generar innovación colectiva, la articulación con los mercados globales y el desarrollo institucional como formas de alcanzar la cohesión social entre la mayoría de los actores que definen el territorio en cuestión. Concebimos las políticas estatales como “acordes” de un proceso social tejido alrededor de una cuestión, que adquieren significación en tanto se vinculan sistemáticamente a la cuestión que las origina, al ámbito de acción social en que se insertan y a los actores que intervienen en el proceso de “resolución” de la cuestión.

4. LAS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA EL DESARROLLO DE SISTEMAS ALIMENTARIOS DE PROXIMIDAD EN EL PERIURBANO DE BUENOS AIRES

El periurbano es una zona de transición, en cuyo espacio se desarrollan actividades urbanas y agrícolas que compiten por el uso del mismo suelo, provocando tensiones, en el contexto de un territorio caracterizado por su accesibilidad desde la gran ciudad, precio elevado de la tierra, intensa competencia entre valores de producción, consumo y preservación. Existe gran diversidad de actores sociales intervinientes en estos espacios (locales, neolocales o extralocales) (Barsky 2013).

Dadas las problemáticas presentadas para el periurbano bonaerense (Feito y Barsky, 2020), uno de los mayores desafíos es diseñar e implementar políticas públicas que permitan regular y gestionar este complejo territorio. Si bien el término “política estatal o pública” es controvertido, podemos decir siguiendo el clásico trabajo de Oszlak y O'Donnell (2007) que una política estatal es esa toma de posición que intenta alguna forma de resolución de alguna cuestión, entendiendo por tal a asuntos (necesidades, demandas) socialmente problematizados, que atraviesan un ciclo vital que se extiende desde su problematización social hasta su resolución. A lo largo de este proceso, diferentes actores afectados positiva o negativamente por el surgimiento y desarrollo de la cuestión,

toman posición frente a la misma. La política estatal o pública, por lo general, incluye decisiones de una o más organizaciones estatales, simultáneas o sucesivas a lo largo del tiempo, que constituyen el modo de intervención del Estado frente a la cuestión. De aquí que la toma de posición no tiene por qué ser unívoca, homogénea ni permanente. De hecho, suele ser todo lo contrario y un conjunto de acciones y omisiones que manifiestan una determinada modalidad de intervención del Estado en relación con una cuestión que concita la atención, interés o movilización de otros actores en la sociedad civil. Política estatal es un conjunto de iniciativas y respuestas, manifiestas o implícitas, que observadas en un momento histórico y en un contexto determinados permiten inferir la posición —agregaríamos, predominante— del Estado frente a una cuestión que atañe a sectores significativos de la sociedad Oszlak y O'Donnell (2007).

Si bien distintos proyectos de actores gubernamentales y no gubernamentales impulsaron actividades relacionadas a la AUPU desde el retorno de la democracia en 1983, estas producciones agropecuarias eran concebidas desde las políticas como respuesta frente a crisis económica y combate contra hambre y pobreza. Diversos organismos reconocieron sus importantes roles en el desarrollo territorial, como la producción de alimentos, cuidado de medioambiente, control de crecimiento urbano. El INTA sostiene acciones desde 1990, mediante el Programa Prohuerta, implementado conjuntamente con el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, que capacita agricultores y promotores, entrega insumos como semillas, animales de granja y frutales, e instala centros demostrativos, con una estrategia de inclusión social. También difunden y apoyan estas producciones instituciones, organizaciones y empresas.

El primer antecedente de apoyo político específico para este sector es la creación de la Dirección de Agricultura Periurbana provincial en 2007. En 2009 se abre la Estación Experimental Area Metropolitana de Buenos Aires del INTA (EEA AMBA), en tanto en 2010 surge el Programa Nacional de Agricultura Periurbana dependiente del entonces Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación. Estas iniciativas constituyeron manifestaciones de la existencia de políticas públicas en diferentes niveles estatales, específicas para el cinturón productivo rural (Barsky, 2013). También se promovieron políticas para fortalecimiento específico de la Agricultura Familiar (en adelante, AF), como la sanción, en diciembre 2014, de la Ley “Reparación histórica de la agricultura familiar para la construcción de una nueva ruralidad en la Argentina” (Feito, 2016).

Los actores intervinientes en las actividades agropecuarias del periurbano bonaerense, son diversos y corresponden tanto al territorio como a

otras procedencias extra-territoriales. Podemos mencionar: los gobiernos municipales (a través de sus áreas de producción, desarrollo social, salud, educación, medio ambiente, etc.); el Gobierno Provincial (a través de sus áreas de agricultura, producción, programas de desarrollo rural); el Gobierno Nacional (a través de los programas y proyectos de la ex Secretaría de Agricultura Familiar del MAGyP, organismos descentralizados como el mencionado INTA, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial —INTI—, el Servicio Nacional de Calidad y Seguridad Alimentaria —SENASA—, y Ministerio de Desarrollo Social); universidades con asentamiento o trabajo territorial; diversas organizaciones de productores; mercados regionales y locales; organizaciones sindicales; servicios penitenciarios y unidades especiales de jóvenes y mujeres; instituciones religiosas; dependencias locales de atención a la salud; asociaciones vecinales y sociedades de fomento; empresariado agroindustrial (frigoríficos, molinos, lecherías, proveedores de insumos y servicios) (Parés, 2009).

El efecto de algunas de estas políticas atenuaron, en el período 2003-2015, las consecuencias en la desigualdad en la distribución de la tierra. Por otra parte, la ayuda financiera a los pequeños productores, aumenta las posibilidades de empleo y coloca a los trabajadores de la agricultura periurbana en mejores condiciones para la puja distributiva (Battista et al, 2015).

Sin embargo, en el contexto económico social durante los años 2015 y 2019, se desarticulaban políticas, programas, proyectos y organismos públicos de apoyo a la AUPU, que no sólo frenaron el proceso de acompañamiento a estas producciones agropecuarias, sino que a la vez pusieron en riesgo el aprovisionamiento de alimentos para la población de la gran ciudad, desestimando la producción y distribución de alimentos sanos y de proximidad. Prueba de ello es el intento de desmantelamiento progresivo de organismos públicos directa o indirectamente relacionados con la alimentación, tales como: i) la baja de categoría del Ministerio de Agroindustria de la Nación a Secretaría; ii) el desguace del personal técnico de la ex Secretaría y actual Subsecretaría de de Agricultura Familiar; iii) la eliminación de la Dirección Nacional de Fortalecimiento Institucional y Apoyo a las Organizaciones; iv) la disolución repentina de la Mesa Nacional de Periurbanos Orgánicos creada en el marco del ex MINAGRO ; v) cambios sucesivos y desinformación sobre la inscripción en el Registro Nacional de la Agricultura Familiar y en el Registro Nacional Sanitario de Productores Agropecuarios. (Feito, 2019).

5. INCIDENCIA EN LAS POLÍTICAS PÚBLICAS LOCALES MATANCERAS

En el año 2001, el gobierno municipal local creó, para paliar la emergencia producida por una de las mayores crisis sociales del país, el Instituto Municipal de Desarrollo Económico y Social (IMDES) como ente autárquico, para promover las actividades productivas, desarrollando junto con la Secretaría de Desarrollo Social local, algunas iniciativas para el sector agropecuario en articulación con el Programa ProHuerta INTA (Battista et al, 2014). Podemos señalar como antecedente distintos espacios de vinculación desarrollados desde el IMDES y la Secretaría de Desarrollo Social junto al Prohuerta del INTA. El trabajo conjunto con organizaciones sociales y productores rurales locales se formalizó en la conformación del “IMDES RURAL”.

Reconocemos diversos actores en las estrategias de intervención para la agricultura familiar en La Matanza: el gobierno local (a través de sus Secretarías de Producción; Desarrollo Social; Salud; Educación y Medioambiente); el gobierno provincial (a través de sus Ministerio de Asuntos Agrarios y programas de desarrollo rural); el gobierno nacional (a través de los programas de desarrollo del MAGyP, de organismos descentralizados como el ya mencionado INTA, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), el Servicio Nacional de Seguridad y Calidad Alimentaria (SENASA), la Secretaría de Medio Ambiente y el Ministerio de Desarrollo Social; universidades con asentamiento o trabajo territorial (La Matanza —UNLaM, Gral Sarmiento— UNGS, Lomas de Zamora —UNLZ, Hurlingham— UNAHUR, entre otras, que realizan capacitaciones, organizan ferias de venta de productos y desarrollan proyectos de investigación sobre agricultura familiar); diversas organizaciones de productores (especialmente hortícolas, florícolas y cunícolas); mercados locales; empresariado agroindustrial (frigoríficos, molinos, lecherías, proveedores de insumos y servicios).

La producción agropecuaria ingresó definitivamente en la agenda del gobierno local en la órbita de la Secretaría de Producción, con la ordenanza municipal 22.658 del 20 de septiembre de 2012, que establece “implementar políticas de economía solidaria, planificando y gestionando actividades con emprendedores que favorezcan la producción, el crecimiento y el desarrollo económico, con la demanda de trabajo y el desarrollo sostenible, en un marco de equidad y justicia social para la construcción de relaciones de producción, distribución, consumo y financiación basadas en la justicia, cooperación, la reciprocidad y la ayuda mutua” (Battista et al, 2014).

Hasta fines del año 2015, existía cierta conjunción de esfuerzos entre gobierno nacional, municipal y organizaciones, mediante articulación de acciones entre EEA AMBA INTA, la ex Secretaría de Agricultura Familiar del MAGyP; la Mesa Local de Productores de La Matanza y el Municipio (Battista et al, 2014). Es innegable el efecto de las políticas nacionales mencionadas en este cambio de visibilidad del sector agropecuario en la política municipal desde comienzos de la década de 2010, dado que los primeros subsidios de apoyo y fomento provinieron del ya mencionado Programa Nacional Periurbano, y debían ser ejecutados a través de los municipios, con lo cual la mayoría de estas unidades administrativas debieron comenzar a reconocer (para aplicar y rendir dichos fondos) la existencia, aportes y potencial de este sector agropecuario en los territorios de sus respectivos distritos (Feito, 2017).

6. EL PROGRAMA “HUERTAS MATANCERAS” COMO UNA POLÍTICA PÚBLICA DE INCLUSIÓN Y SOBERANÍA ALIMENTARIA

Este incipiente reconocimiento de la existencia e importancia de las producciones agropecuarias del partido cristalizó en enero del año 2016, con la conformación de un equipo en la Secretaría de Producción del Municipio para elaborar un programa de desarrollo que permitiera incorporar a la producción hortícola nuevas familias. Con la articulación con el equipo técnico de la EEA INTA AMBA, se comenzó a “reconstruir los territorios desde abajo” (testimonio funcionario municipal). Así, funcionarios del gobierno local comenzaron a visitar el territorio junto con técnicos de INTA. A fines de ese mismo año, el Municipio realizó el Primer Encuentro Regional de Agricultura Urbana Periurbana y Rural, con una convocatoria de más de 300 personas. Este encuentro tuvo amplia repercusión y fortaleció la visibilización de la producción primaria, especialmente el sector de la AF. Como resultado, a fines de enero del año 2017, la Secretaría de Producción local puso en marcha el Programa Huertas Matanceras, con el objetivo general de “mejorar la seguridad alimentaria de la población urbana, periurbana y rural, incrementando la disponibilidad, accesibilidad y variedad de alimentos, mediante su autoproducción, con enfoque agroecológico, de acuerdo a las particularidades y costumbres de nuestra región” y (...) favorecer la participación y la organización de las comunidades con las que trabaja, para que las mismas sean actores plenos de procesos influyentes de desarrollo local y territorial” (folletera oficial). La iniciativa

se apoyaba en cuatro pilares: las escuelas, las organizaciones de pequeños productores, los programas sociales y las familias matanceras. La propuesta incluía: mejorar y diversificar la alimentación de las familias, escuelas, instituciones y organizaciones de la comunidad que participaban; promover tecnologías apropiadas para la producción de cultivos; promover alternativas productivas que puedan integrarse en un mercado de economía social. Interventaban en la implementación del programa cinco secretarías municipales: Producción; Ciencia, Tecnología y Políticas Educativas; Desarrollo social; Medioambiente y desarrollo sustentable; Deporte y Recreación, coordinando acciones con el mencionado IMDES y, a nivel externo, con las Unidades Ejecutoras de los programas ya existentes Ellas Hacen y Argentina Trabaja, ambos del Ministerio de Desarrollo Social de Nación MDS.

El Municipio lo definía en ese momento como un programa para la soberanía alimentaria mediante autoproducción agroecológica, que intentaba fortalecer capacidades en un contexto de dificultad para las familias matanceras para llevar productos frescos a su mesa, debido al alto costo de los alimentos. Otro objetivo inicial fue lograr con las primeras cosechas de las huertas, realizar agregado de valor mediante capacitaciones en la realización de dulces, conservas y salsas, para diversificar el uso del producto.

El Programa tenía tres líneas de trabajo :

- 1) huertas comunitarias: se promovió la construcción de huertas, desarrollándose territorialmente en dieciocho sedes del Programa Enviñón del (MDS) y participaban 150 mujeres del Programa Ellas Hacen, casi todas ellas diplomadas en agroecología⁵⁸, como promotoras y formadoras. Las sedes del Programa Enviñón en el distrito, le otorgaban al “Huertas Matanceras” un espacio físico de referencia . De este modo, se articularon dos políticas de inclusión del gobierno nacional anterior (los programas “Ellas hacen” y “Enviñón”), retomando la lógica organizativa y

58. El programa “Ellas Hacen” fomenta el acceso al trabajo a aquellas mujeres que atraviesan una situación de mayor vulnerabilidad o de violencia de género. Las participantes son parte de una cooperativa de trabajo, y a su vez participan de distintas capacitaciones como oficios, formación sobre economía social, ciudadanía urbana y perspectiva de género. Nos referimos a la “Diplomatura de Operadoras sociales con orientación en agroecología, urbanismo y hábitat social y producción e intervención en cultural popular”, un ciclo de formación que impulsó el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación para las cooperativistas del programa.

- objetivos del ProHuerta de INTA: lograr la autoproducción de alimentos. También se articularon acciones con Ministerio de Asuntos Agrarios de la Provincia de Buenos Aires;
- 2) huertas en escuelas: articulando con el Programa “Argentina Trabaja”, repartiendo la cosecha en cada caso particular, se lograba que los alumnos de escuelas públicas del distrito y sus familias recibieran capacitación, semillas y respuesta al momento de tener algún problema en el armado de la huerta en sus casas.
 - 3) Rescate de pautas alimentarias: mediante la enseñanza de cocina, para recuperar saberes y evitar pérdida de cualidades nutritivas de los alimentos y el diseño por parte de las promotoras de un Manual de Producción del Programa .

Con estas líneas de trabajo, la política pública transversal ejecutada mediante la articulación de varios programas (el local Huerta Matanceras con los nacionales Ellas Hacen y Envión) posibilitaba llegar a los hogares de los vecinos mediante un actor político local diferente: las mujeres voluntarias del Ellas Hacen.

Con el avance de la implementación del programa, se desarrollaron ciertos conflictos. La articulación de distintos programas previos conllevó la necesidad de entender quién es el otro y qué posibilidades tenía cada uno en función de su rol. Las mujeres del “Ellas Hacen” eran voluntarias, dependientes de un programa municipal por el cual cobraban en 2017, \$4.000 mensuales. Por otra parte, los mencionados programas nacionales “Argentina Trabaja” y “Envión”, tenían sus respectivas Unidades Ejecutoras, de las cuales dependían las mujeres que participaban también en el Huertas Matanceras. A estas mujeres les costaba reconocerse como “municipales” (en tanto trabajan como voluntarias en un programa del gobierno de La Matanza) ya que venían trabajando en un programa nacional.

Por otra parte, la producción de verduras en las huertas no había conseguido un espacio de comercialización específico de impacto, porque aún no alcanzaba la escala suficiente como para organizar ferias regulares. En cuanto al comercio estatal, el municipio tenía reglamentado el 5% de beneficio por sobre oferta de terceros a empresas locales en general .

Durante el año 2017 se habían entregado más de 5.000 kits de semillas (que permitían cada uno cultivar entre 100 y 150 metros cuadrados y alimentar aproximadamente a 67 familias), tanto a agricultores familiares ya instalados en el partido, como a los vecinos que querían armar por primera vez

huertas en sus casas, previa participación obligatoria en tres capacitaciones que dictaba el programa.

En definitiva, la finalidad del Programa Huertas Matanceras consistía en generar herramientas desde el Estado local, a fin de lograr una comunidad organizada en función de la idea de la soberanía alimentaria. Creemos que mostrar al sector político el impacto de este Programa permitía, al llevar a cabo un proyecto de esta envergadura, empezar a reconocer el sector: comienza a existir conciencia de que hay producción agropecuaria en el partido.

7. ENTRECruzamiento DE DOMINIOS SOCIALES EN LAS EXPERIENCIAS DE INTERVENCIÓN PARA EL DESARROLLO

La implementación de una intervención de desarrollo puede describirse como el momento en que diversos dominios sociales se entrecruzan y son mutuamente construidos. Focalizar la atención en ese entrecruzamiento de dominios sociales o interfaces de diferentes actores permite ver arenas de conflicto, donde se negocian prácticas, discursos y sentidos, que a la vez modelan en cierta forma la intervención (Rodríguez Bilella, 2004). Estos espacios comprenden sujetos locales, en lo referido a la acumulación de capacidades de gestión colectiva, así como sujetos que personifican la intervención de instituciones externas (gubernamentales o no). Los distintos tipos de actores conservan un significativo grado de autonomía que les permite preservar sus representaciones e intereses particulares y sectoriales, al tiempo que participan del proyecto cumpliendo objetivos grupales e institucionales.

La actividad productiva agropecuaria en La Matanza cuenta con el importante aporte de experiencias asociativas con tradición y vinculación con el territorio. Como resultado de nuestro trabajo de campo encontramos las siguientes:

- Sociedad Rural de La Matanza: entidad que representa localmente los intereses de la tradicionalista Sociedad Rural Argentina, está mal vista por los pequeños productores, si bien en algún momento éstos participaron de alguna subcomisión local.
- Asociación Civil “Los Cirujas”: surgió en 1996 con el apoyo de técnicos de Prohuerta, para mejorar las capacidades productivas de las huertas y compartir experiencias sobre las mismas, y es una de las

más antiguas del partido. Desarrollan actividades y espacios de construcción colectiva con organizaciones locales, nacionales y regionales. También tienen un Centro Reproductor de Aves, instalado con subsidio del programa Manos a la Obra del Ministerio de Desarrollo Social nacional, donde crían y venden pollos como emprendimiento comercial. Además venden huevos, artesanías, dulces y plantines, realizando agregado de valor en origen. Desarrollaron el emprendimiento “Abriendo Horizontes”, con apoyo técnico de los extensionistas de la Agencia de Extensión de Marcos Paz del INTA AMBA.

- Asociación “Amaru La Granja”: coordinada en 2017 por un productor referente de la Mesa Local Matanza de la Federación de Organizaciones Nucleadas de la Agricultura Familiar FONAF, tiene una finca donde se elaboran verduras, frutas, carne (cerdos, conejos, cobayos), huevos, gallinas, artesanías (hilado, armado de vellón, secado, teñido, colorado, tallado de mates). Está inscripto en Registro Nacional Sanitario de Productores Agropecuarios (RENSPA) y tiene habilitación municipal.
- Asociación Virrey del Pino: tienen producción hortícola y recibieron el primer tractor entregado con el subsidio del mencionado Programa Nacional del Periurbano del MAGyP.
- Unión de Micro Emprendedores de La Matanza (UNEMA): conformada por microemprendedores no sólo productores familiares, sino también revendedores de calzado, bazar, textiles, artesanías. Recibían apoyo político y subsidios del Ministerio Desarrollo Social, formando parte de la Mesa Matanza FONAF. Promovían la economía social y solidaria y el comercio justo y formaban parte también de otra organización de segundo grado: el Espacio Nacional de la Economía Social y Solidaria (ENESS), en el cual se agrupaban con otras organizaciones extra locales. Esta asociación se disolvió por problemas internos entre sus miembros .
- Red de promotores Prohuerta Matanza: conformada por Promotores Voluntarios del programa Prohuerta INTA, elaboran dulces y conservas artesanales que venden en las ferias que organiza la Mesa Matanza FONAF. Entregan semillas y dictan capacitaciones de huertas en distintos barrios y localidades del partido.
- Mesa Local Matanza de la FONAF: articula acciones con distintos organismos: nacionales (MAGyP, a través de la Secretaría de AF; INTA, a través del Instituto de Investigaciones para la AF y del Programa Prohuerta) y locales (Municipio, mediante Secretaría de Producción y el IMDES).

Este último organismo descentralizado del gobierno local recibe y administra el dinero de subsidios del MAGyP, que la Mesa de productores solicita sean en su lugar manejados por la Secretaría de Producción local. En junio del año 2012 se realizó el Primer Plenario de AF de La Matanza, en el cual participaron: la Mesa, el Municipio, la Secretaría de AF y el INTA. Los productores entrevistados son concientes de la importancia del asociativismo que, expresan, les permite lograr acciones concretas para mejorar sus producciones y su calidad de vida. Esta Mesa también organizó varias Ferias de Economía Social y Solidaria, donde los agricultores familiares exhibían y vendían sus producciones.

Durante el gobierno nacional kirchnerista (2015-2019), encontramos que diferentes organismos públicos emitían avales, apoyo y subsidios, según el tipo de organización de que se tratase: aquellas de agricultores familiares recibían apoyo de la ex Secretaría AF del Ministerio de Agricultura; en tanto las de microemprendedores (que incluyeran otro tipo de actor social no productor agropecuario) lo recibían del Ministerio de Desarrollo Social. Las organizaciones se identificaban fuertemente con el organismo público que les daba apoyo, según el tipo de relación entre estos organismos. Algunas buscaban articular acciones para recibir financiamiento, en tanto otras preferían una estrategia más autogestionaria. A su vez, los funcionarios entrevistados también mostraron diferencias: los del municipio manifestaban una clara preocupación para que los productores fueran registrados y realizaran sus actividades dentro del sistema, en tanto los de Desarrollo Social se mostraban más flexibles frente a las exigencias de formalización, a la hora de aprobar subsidios o financiamiento.

En el caso analizado, administraban más poder los líderes de las organizaciones locales por tener más y mejores accesos a contactos externos de instituciones gubernamentales (ex Secretaría AF de Nación; Municipio; INTA; SENASA). La capacidad de agencia se vislumbraba en la concreción de acciones específicas como el armado de ferias de productos con recursos de organismos públicos participantes, generando a su vez redes de actores para poder administrar dichos recursos, con miembros de las organizaciones, funcionarios del IMDEL local, técnicos del INTA. La negociación con los modelos de interacción de las instituciones involucradas era constante y se evidenciaba en convocatorias a reuniones, llamados telefónicos, traslado de agricultores a las sedes de las instituciones locales o extralocales, visitas de los funcionarios y técnicos a las fincas. Se vislumbraba claramente que el fortalecimiento de lazos asociativos entre los

productores y la consolidación de vínculos con distintos niveles gubernamentales podían mejorar el desempeño de las producciones agropecuarias y aportar a un proceso de desarrollo local integral e inclusivo.

Estudiar el nivel micro de aplicación de las modalidades de intervención nos permitió ver el lugar de intersección entre las áreas de incertidumbre naturalmente provocadas por los problemas y necesidades de la población beneficiaria (falta de recursos financieros, problemas de acceso a crédito) y las áreas de incertidumbre artificiales o inducidas, consecuencia intencional de la intervención externa (confusión en fechas de otorgamiento de subsidios, falta de claridad para justificar por qué no llegaba el dinero). A los actores estatales relevados, en general les interesaba favorecer a los agricultores en la medida de conseguir aportes a su capital político como funcionarios. En tanto, la población beneficiaria disputaba el capital económico necesario para desarrollar sus actividades, por eso se podría decir que este campo iba siendo construido a partir del conflicto y la negociación permanentes (Long, 1992).

El gobierno local aún no reconoce acabadamente el potencial del sector económico agropecuario (particularmente, el de AF), a pesar de que, al ser parte de una agricultura periurbana de proximidad, posee herramientas para realizar una producción sustentable, pudiendo constituir una oportunidad para el desarrollo local, con impacto en empleo y mediante el abastecimiento de productos frescos (Battista et al, 2014).

Los resultados del proceso de implementación de la intervención no deben ser analizados meramente a partir de la influencia de actores externos al programa, sino por las acciones de los mismos intervinientes al interior del programa (Long, 1992), en este caso, productores y extensionistas. Diferentes actores en el dominio del terreno y en el dominio administrativo representaron y actuaron en relación a la implementación: mientras que los productores la representaron como forma de acceso a recursos, los extensionistas vieron la posibilidad de mejorar su inserción en la estructura institucional. La elección de focalizar la intervención a los productores familiares de La Matanza remite a que allí se encuentran los más “invisibles” del distrito. En este sentido, solucionar sus problemas “históricos” (de producción, tecnología, comercialización, asociativismo, etc) constituiría cierta conquista político-institucional para las instituciones participantes. Ya vimos las articulaciones en apoyo hacia los productores: técnicos de universidades de la región con las cuales INTA tiene convenios para pasantías y asesoramientos; en tanto que con el Ministerio de Desarrollo Social nacional se gestiona apoyo financiero para algunas agrupaciones.

El análisis de estrategias es clave al reconstruir los modos de intervención de las políticas de desarrollo local. Los actores intervinientes constituyen sus propias formas de vincularse con las instituciones que intervienen. Los productores beneficiarios analizados se apropiaron del discurso del Programa ProHuerta para conseguir recursos que de otra forma no obtendrían (provisión de semillas, asesoramiento en fortalecimiento organizacional y presentación de tramitación para formalizar asociación). Utilizaron estrategias que involucraban otros actores, tales como los extensionistas, quienes a su vez, necesitaban contar con grupos de productores a quienes atender, a fin de mantener sus salarios y su posición en la estructura de la institución en la que trabajaban.

Las intervenciones de desarrollo no pueden comprenderse sólo desde las instituciones que las implementan: se requiere considerar los mundos de vida de todos los actores involucrados (Rodríguez Bilella, 2004). En el caso de los técnicos, su perfil de formación social les permitió comprender necesidades expresadas por los productores (que sobrepasaban aspectos de asesoramiento meramente técnico) y gestionar contactos y acciones concretas (intervenir por reclamos ante el gobierno local, etc).

En las modalidades de intervención, todo flujo externo proveniente del Estado, del mercado, de grupos dominantes o de agentes externos al grupo en cuestión, es mediatizado por esos mismos actores (y las organizaciones locales que integran), quienes procuran reprocesar dichos factores externos a favor de sus propios intereses y necesidades. Por eso, los productores estudiados fueron encontrando soluciones concretas a sus problemas: los que hacían agricultura agroecológica legitimaron su reconversión productiva a través del aval de los técnicos del programa; consiguieron financiamiento para realizar ferias locales de comercialización de sus productos, asesoramiento organizacional y capacitaciones. Así, enriquecieron o cuestionaron los mecanismos estatales, o se adaptaron a ellos, de acuerdo a mecanismos regulatorios que ya conocían en sus prácticas grupales.

En la intervención analizada, el Municipio utilizó, junto con el INTA, una estrategia de reconversión hacia la agroecología, construyendo nuevos espacios productivos en terrenos antes impensados (patios de escuelas, asociaciones civiles y casas particulares), que constituyeron un aporte importante a la economía de las familias participantes, proveyendo alimentos sanos y contribuyendo así a la seguridad y soberanía alimentaria de la población local.

Los procesos sociales que derivan de una intervención de desarrollo implican negociaciones que son diferencialmente internalizadas por los diversos

actores (Long, 2001). Nuestro análisis desafía la visión de los extensionistas como implementadores mecánicos de una idea o esquema previamente planificado; por el contrario, en el caso bajo estudio son sujetos pragmáticos que luchan con las dificultades cotidianas de la implementación práctica de la intervención.

La perspectiva teórica y metodológica del enfoque orientado al actor permite entender cómo se distribuye el conocimiento en las intervenciones de desarrollo. Los programas son “construidos” y moldeados por diferentes interacciones de múltiples actores. Utilizando el análisis de interfaces, se comprende la forma en que los intereses, metas, percepciones y estrategias de diversos actores vinculados al programa resultan continuamente readaptados en función de las múltiples interacciones entre los actores locales y extra-locales. Sin embargo, las complejas interacciones entre los “proyectos” y prácticas de los actores, sus resultados esperados e imprevistos, crean tanto marcos habilitantes como limitantes de la acción social (Guiddens, 1984). Focalizando en la interacción de las relaciones internas y externas, este enfoque procura brindar una perspectiva más dinámica sobre las intervenciones de desarrollo y los procesos de implementación de políticas.

8. PROPUESTA DE POLÍTICAS PÚBLICAS

Entre los desafíos de políticas públicas a implementar para los productores matanceros, podemos mencionar, en diferentes dimensiones (Foro de Universidades, 2011):

En una dimensión económico productiva: i) políticas específicas de fomento y mantenimiento de los cinturones verdes que protejan las tierras productivas periurbanas; ii) impulso al agregado de valor a los productos en origen, desarrollo de la identidad local, recuperación de saberes locales, iii) mejorar la logística de conexión entre localidades; iv) consolidar y promover modalidades de comercialización alternativas para la AUPU, como bolsones de verduras, ferias, cooperativas de consumo, etc. (Caracciolo, 2015) y circuitos cortos de comercialización; v) políticas de precio justo, que faciliten acceso a los alimentos por parte de todos los estratos sociales y de regulación de precios en toda la cadena de producción y distribución de alimentos; vi) organización gremial y/o asociativa de los trabajadores y productores agropecuarios de la AUPU; vii) políticas de subsidio, financiamiento y crédito para la AUPU, que implica un

importante involucramiento de los gobiernos locales; vii) educar y organizar a los consumidores (sector poco considerado tanto por las políticas como por la academia y la sociedad civil), dada la importancia estratégica de que todos somos consumidores de alimentos, y promover el consumo responsable que valore el consumo de alimentos sanos y de proximidad; viii) involucrar a las organizaciones de consumidores en diseñar sistemas productivos y comerciales de proximidad; xi) aportar al sostenimiento de las nuevas generaciones de productores en el territorio y la revalorización del trabajo en la tierra, para promover el arraigo, mediante políticas de desarrollo de infraestructura, servicios públicos, salud y educación; x) incluir temáticas sobre el periurbano en los programas curriculares de las carreras de grado en universidades y centros de estudio;

En una dimensión ambiental: i) disminuir el impacto ambiental negativo de las producciones intensivas, mediante acciones de comunicación y difusión a los productores de las buenas prácticas agrícolas y comerciales, promover y capacitar en técnicas de producción sin agroquímicos o de implementación gradual; ii) planificar el uso del territorio, de manera de que prevalezcan en los gobiernos locales definiciones de perfil de territorio productivo, en lugar de industrial y/o residencial; iii) integrar las producciones y los mercados de proximidad desde una mirada ecosistémica; iv) generar estrategias de usos rentables de los residuos; v) elaborar protocolos de certificación social participativa inclusiva, para asegurar la calidad bromatológica de los productos; vi) promocionar asistencia técnica y financiera para reconversión de las producciones agropecuarias de la AUPU hacia la transición agroecológica; vii) promover y realizar análisis académicos de impacto ambiental en términos de la interface urbano-rural que constituye el territorio periurbano; viii) ordenamiento territorial que permita acceso a tierra, agua y semillas, para la producción de alimentos en el periurbano; xi) promover la trazabilidad de las producciones.

En una dimensión político institucional: i) articular instituciones públicas; ii) fortalecimiento jurídico, estableciendo nueva normativa y controlando el cumplimiento de la existente, adecuándola a la escala del periurbano y promoviendo la participación de organizaciones de base para una construcción conjunta; iii) considerar el periurbano como un sistema complejo y desarrollar herramientas y estrategias acordes a estas características diferenciales; iv) desarrollo de Planes Municipales Estratégicos por parte de los gobiernos municipales; v) capacitar legisladores y funcionarios municipales sobre las temáticas

relacionadas con la producción AUPU; vi) crear consensos convocando a todos los actores y sectores del periurbano (locales y extralocales que influyan en el territorio); vii) fomentar y fortalecer la organización y asociativismo del sector de la producción de alimentos sanos de proximidad.

9. REFLEXIONES FINALES

En las intervenciones analizadas en el distrito de La Matanza, el desarrollo es concebido desde un enfoque integral territorial que considera aprovechar las potencialidades existentes. Por ello, el fortalecimiento de lazos asociativos entre los productores y la consolidación de vínculos con los distintos niveles de gobierno así como con el Programa Huertas Matanceras, pueden mejorar el desempeño de las producciones del partido y aportar a un proceso de transición agroecológica, aportando a la seguridad y soberanía alimentaria. Lejos de ser pasivos receptores del discurso de reconversión productiva del programa, los productores y vecinos de La Matanza se apropian del mismo, en orden de alcanzar las ventajas que ofrece. De distintas maneras, negocian el alcance de recursos que si no fuera por formar parte del programa, no conseguirían (provisión de semillas y herramientas, asesoramiento en fortalecimiento organizacional). Podemos decir que las políticas implementadas tanto por INTA como por el Municipio son de promoción, ya que se produce un ida y vuelta entre el que da y el que recibe, fortaleciéndose la relación Estado-sociedad civil pero sólo desde el nivel de las políticas sociales, sin vinculación con lo económico, donde el que recibe es activo, y además, hay capacitación, se promueven las capacidades (Arroyo, 1997). Es necesario todavía fortalecer al sector en una estrategia sostenida de desarrollo orientada a la inclusión social, la sustentabilidad económica de la producción local y el respeto y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales. Por otra parte, las acciones a veces desarticuladas por parte de distintas instituciones, colaboran a fragmentar las débiles organizaciones de productores existentes. El fortalecimiento de lazos asociativos entre los productores y la consolidación de vínculos con distintos niveles gubernamentales pueden mejorar el desempeño de las producciones y aportar a un proceso de desarrollo local.

A fin de contrarrestar estas políticas de desmantelamiento que sufrieron las producciones agropecuarias familiares y periurbanas, desarrolladas durante el gobierno neoliberal entre fines de 2015 y fines de 2019, se requiere lograr

avances que coloquen en la agenda gubernamental al periurbano, mediante ciertas acciones: i) fortalecer los módulos demostrativos de producción alternativa al modelo hegemónico actual del agronegocio (que ya funcionan en lugares como la EEA AMBA INTA en el partido de Ituzaingó, en el periurbano Oeste); ii) extender la conformación de observatorios y agencias en el territorio periurbano; iii) crear comisiones de discusión sobre la temática del periurbano en ámbitos profesionales, académicos y gubernamentales.

Finalmente, destacamos que se requiere planificación territorial como herramienta para poner en valor el potencial endógeno de las localidades. El desarrollo ligado al territorio representa un valor estratégico para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y corregir las inequidades sociales.

Bibliografía

- Arroyo, D. (1997).** Estilos de gestión y políticas sociales municipales en la Argentina. En: *Hacia un modelo de gestión local. Municipio y sociedad civil en la Argentina*. Oficina de Publicaciones del CBC -UBA. Buenos Aires, 1997.
- Asiain, A. (2013).** González Catan y Virrey del Pino: La soja matancera hace su aparición. En: *Diario NCO*, consultado 14 noviembre 2014. <http://noticiasconobjetividad.wordpress.com/2013/03/27/gonzalez-catan-y-virrey-del-pino-la-soja-matancera-hace-su-aparicion/>
- Battista, S.; M.C. Feito; A.O. Cruz; M.S. Irigoyen; A.N. Virdó; M.V. Aznar; L. Lipera; S. Pettinato; C. Almonacid (2014).** Caracterización del sector agrícola en el Partido de La Matanza. Sustentabilidad económica, social y ambiental. PROINCE (Programa de Incentivos para Docentes Investigadores). Departamento de Ciencias Económicas. Cód. B. 165.
- Battista, S.; Feito, M. C.; Cruz, A.O.; Irigoyen, M. S.; Virdó, A. N.; Aznar, M. V.; Lipera, L.; Pettinato, S.; Almonacid, C.A. (2015).** La potencialidad del sector agrícola matancero para un proceso de desarrollo sustentable: actualidad, antecedentes y perspectivas futuras. PROINCE, Universidad Nacional de La Matanza. Cód. B 181
- Barsky, A. (2013).** Gestionando la diversidad del territorio periurbano desde la complejidad de las instituciones estatales. Implementación de políticas públicas para el sostenimiento de la agricultura en los bordes de la Región Metropolitana de Buenos Aires (2000-2013). Tesis Doctoral, Universitat Autònoma de Barcelona. <http://www.thesisred.net/bitstream/handle/10803/129121/ab1de1.pdf?sequence=1>
- Caracciolo, M. (2019)** Espacios comerciales alternativos de la agricultura familiar: criterios para su análisis y diferenciación. En: Viteri, M.L; Moricz, M. y Dumrauf, S. (comp.) *Mercados, diversidad de prácticas y de consumo*. Ed: INTA, Bs As. Pp 133-161.
- Carballo, C. (2014).** “Soberanía alimentaria y producción de alimentos. Situación actual y desafíos para la transición”. En *Seguridad y soberanía alimentaria* (13-38). Buenos Aires: Akadia
- Feito, M. C. (2005).** Antropología y desarrollo. Contribuciones del abordaje etnográfico a las políticas sociales rurales. El caso de la producción hortícola bonaerense. Buenos Aires: Ed La Colmena.

- Feito, M. C. (2014)** Ruralidades, desarrollo, territorio y agricultura familiar en el Periurbano Norte de Buenos Aires. El caso de los partidos Exaltación de la Cruz y Luján. Bs As: Ed La Colmena.
- Feito, M.C. (2016).** Gestión de sistemas productivos locales para el desarrollo local de agricultores familiares periurbanos en La Matanza, provincia de Buenos Aires, Argentina. En: Actas IV Congreso Internacional de Desarrollo Local, Lima, Perú, 9 al 12 de noviembre del 2016.
- Feito, M. C. (2017).** Visibilización y valoración de la agricultura familiar periurbana. Intervenciones de políticas públicas en el partido de La Matanza. *Mundo Agrario*, 18(38), e055. Universidad Nacional de La Plata. <https://doi.org/10.24215/15155994e055>.
- Feito, M.C. (2018^a):** Problemas y desafíos del periurbano de Buenos Aires. En: *Revista Estudios Socioterritoriales*, N° 24 julio-diciembre 2018, e002. Disponible en: <http://revistaest.wix.com/revistaestcig>
- Feito, M.C. (2018b):** Políticas públicas de inclusión y soberanía alimentaria en el marco de acciones para el desarrollo rural. El Programa Huertas Matanceras, La Matanza, Argentina. En: Actas X Congreso Latinoamericano de Sociología Rural, Montevideo, Uruguay, 25 al 30 noviembre 2018.
- Feito, M.C. (2019).** “Políticas públicas y gestión para la Agricultura Familiar en el Area Metropolitana de Buenos Aires: problemas y desafíos”. Actas del Primer Encuentro Latinoamericano de Estudios del Rururbano. ELER. Santa Fe, Argentina, 7 y 8 de marzo 2019.
- Feito, M.C. y Barsky, A. (2020)** Periurbano (1980-2020). En: Salomón, A. y Muzlera, J. (comps.) *Diccionario del Agro Iberoamericano*. Ed Tesseo Press. Foro de Universidades Nacionales para la Agricultura Familiar Región Pampeana (2011). Documento O. Ed: INTA, Bs As.
- Giddens, A. (1984).** *The construction of society: an outline of the theory of structuration*. Cambridge, Polity Press. UK.
- INDEC (2002).** Censo Nacional Agropecuario 2002. Instituto Nacional de Estadística y Censos, Ministerio de Economía.
- INDEC (2010).** Censo Nacional de Población y Vivienda 2010. Instituto Nacional de Estadística y Censos, Ministerio de Economía. Disponible en: https://www.indec.gov.ar/ftp/censos/2010/CuadrosDefinitivos/P2-D_6_427.pdf
- Long, N. (1992).** From paradigm lost to paradigm regained? The case for an actor-oriented sociology of development. En: Long N. y Long A. 1992 *Battlegrounds of Knowledge. The interlocking of theory and practice in social research and development*. Routledge, UK.

- Long, N. (2001).** *Development Sociology: Actor Perspectives*. Routledge, UK.
- Manzanal, M. (2006).** Regiones, territorios e institucionalidad del Desarrollo Rural. En: Manzanal, M.; G. Neiman y M. Lattuada (comps.). *Desarrollo rural. Organizaciones, instituciones y territorios*. Ed Ciccus, Bs As.
- Oszlak, O. y G. O'Donnell (2007).** Estado y políticas estatales en América Latina: hacia una estrategia de investigación (1ª edición, pp.555-585). En C. Acuña (comp.) *Lecturas sobre el Estado y las políticas públicas: retomando el debate de ayer para fortalecer el actual*. Bs As: Jefatura de Gabinete de Ministros.
- Parés, G. (2009).** Las funciones de la agricultura urbana y periurbana en La Matanza, desde la óptica de los propios agricultores, en la primera década del siglo XXI. Tesis de Maestría. Buenos Aires/Madrid: Universidad Nacional de San Martín / Universidad Autónoma de Madrid.
- Rodríguez Bilella, P. (2004).** “Etnografía y política social: el caso del enfoque orientado al actor”. Ponencia presentada a las IV Jornadas de Etnografía y Métodos Cualitativos, IDES, Buenos Aires, agosto 2004.
- Rodríguez Bilella, P. y Tapella, E. (2008):** “Transformaciones globales y territorios”. Buenos Aires, Ed. La Colmena.
- Sen, A. (1982)** *Choice, Welfare and Measurement*. Oxford, Blackwell